PARTE V

IDENTIDADES

Testimonio, silencios y disputas: la desaparición de Kimy Pernía Domicó

*Fredy Leonardo Reyes Albarracín**

Introducción

En el año 1992, con la conformación de la empresa Urrá, S.A., se dio inicio a uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en Colombia: la construcción de la Hidroeléctrica Urrá. La conformación de la empresa fue un movimiento estratégico por parte del gobierno del presidente César Gaviria Trujillo, tendente a acelerar un proceso que se remonta al año 1971, cuando arrancan los primeros estudios de factibilidad de la obra¹.

* Candidato Ph.D. en Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), Argentina. Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y comunicador social por la Universidad Central, Colombia. Coordinador del Énfasis de Comunicación-Educación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y coordinador del Grupo de Memoria de la División de Ciencias Sociales.

1 Despuntando el año 1971, la desaparecida Corporación Eléctrica del Caribe contrató un estudio de factibilidad para proyectar la construcción de una hidroeléctrica generadora de 300.000 vatios de energía. El estudio de factibilidad Urrá I y Urrá II se presentó en 1977, lo que llevó al gobierno de la época (Julio César Turbay Ayala) a declarar el área de ejecución de “utilidad pública”. Poco después se estableció un convenio con la empresa rusa V.O. Energomachexport para efectuar el diseño, suministro y montaje del equipo hidroeléctrico. De igual forma, para 1982, el gobierno de Belisario Betancourt Cuartas firmó el contrato con la empresa sueca Skanska Conciviles para el inicio de las obras civiles.

Seis meses después de creada Urrá S.A., el desaparecido Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inderena) otorgó la licencia ambiental para la construcción del proyecto Urrá I, iniciándose las obras civiles el 22 de julio de 1993.

El impacto directo de la construcción de la hidroeléctrica tuvo al pueblo aborígen emberá katio² como principal protagonista, toda vez que el 13 de enero de 1996 se desvió el cauce del río Sinú para poder construir la presa. Los impactos negativos continuaron para los aborígenes en el 1999 –año en que culminaron la ejecución de las obras civiles–, cuando el Ministerio de Medio Ambiente otorgó una nueva licencia ambiental, esta vez autorizando el llenado del embalse para que entrara en operación la Central Hidroeléctrica Urrá I. Efectivamente, para comienzos del 2000 (15 de febrero), la hidroeléctrica se puso en funcionamiento. A lo largo de este periodo, las protestas en torno a la construcción de la represa fueron intensas, teniendo en cuenta las múltiples consecuencias identificadas y estudiadas por las organizaciones sociales, ambientales y aborígenes. Las consecuencias se pueden categorizar en cuatro grandes tópicos:

1. Tanto la desviación del río Sinú como la inundación de poco más de 400 hectáreas de bosque generaron un desastre ecológico, representado en la descomposición de más de 7000 hectáreas de biomasa y la alteración de los ciclos de las especies piscícolas, entre ellas el bocachico, principal fuente proteínica para el pueblo emberá katio. Aunque la empresa implantó proyectos para la cría de peces en estanque, los resultados fracasaron por la resistencia cultural que el

2 Los emberá katio son uno de los 87 pueblos aborígenes colombianos reconocidos por el Ministerio del Interior y de Justicia. Se extienden a lo largo de la costa pacífica y la región noroccidental colombiana, y forman parte del grupo ébëra, también integrado por los pueblos emberá y emberá chamí. Los afectados por la construcción de la represa están representados por unas 2400 personas –alrededor de 450 familias– que habitan la parte alta de la cuenca del río Sinú, en un área estimada en 103.517 hectáreas que conforman el gran resguardo Ébëra Katío del Alto Sinú, territorio que también forma parte del Parque Nacional del Paramillo, donde confluyen los ríos Esmeralda (Kuranzadó), Verde (Iwagadó) y Cruz Grande (Kiparadó). La recolección de frutos, la cacería, la pesca y el desarrollo de una agricultura itinerante, propia de las características ambientales que posee una selva tropical húmeda, configuran sus principales actividades económicas. El consumo de pescado constituye su principal fuente de abastecimiento alimenticio.

aborigen tiene frente a una práctica que no forma parte de sus usos y costumbres.

2. La inundación del territorio incluyó sitios sagrados, lugares rituales, referentes simbólicos, escenarios de encuentro espiritual, provocando un impacto en las prácticas y representaciones sociales de los emberá katío. Ese impactó no solo está en el trastoque que se experimenta en la relación espiritual propia de su cosmogonía, sino también en la irrupción de una serie de valores propios de la economía de mercado que erosionan “la tradición, la vejez y el conocimiento ancestral”.
3. Como parte de la estrategia adelantada por la empresa Urrá, S.A., en los procesos de discusión con los emberá katío –consistente en deslegitimar la autoridad infundida en los representantes aborígenes en las mesas de negociación– se fomentó una fragmentación organizativa que hoy se traduce en cuatro cabildos, cada uno buscando reivindicar unos mismos derechos, soslayando el hecho de que están enfrentando a un mismo agente. Cabe resaltar que aunque tradicionalmente los emberá se han caracterizado por un carácter político difuso, al momento de estallar el conflicto había solo un cabildo.
4. Quizá uno de los efectos más traumáticos derivados de la construcción de Urrá I esté en el paulatino incremento de la violencia contra los líderes de los emberá katío. De acuerdo con los datos registrados por los cabildos mayores del río Sinú y Verde, las desapariciones, asesinatos, masacres y desplazamientos se constituyeron en las principales acciones en los territorios desde que comenzó el conflicto³.

3 Para ejemplificar la gravedad del asunto, quisiera referir algunos de los acontecimientos más relevantes que precedieron la desaparición de Kimy Pernía Domicó. El miércoles 6 de marzo de 2001 fue secuestrado y posteriormente asesinado por las Autodefensas el dirigente José Ángel Domicó, jejené o alguacil mayor del río Sinú, ocurrido a media cuadra del cabildo del río Verde y el río Sinú. La indignación se apoderó de los emberá katío, quienes tuvieron que movilizarse desde el resguardo hasta Tierralta, para presionar la entrega del cuerpo del dirigente. La violencia continuó el domingo 1º de abril, cuando fue asesinado por las FARC el líder Betín Bailarín de la comunidad de Kakaradó, cuyo cuerpo fue abandonado en el cerro Widó, prohibiendo a su familia recuperar el cadáver. El miércoles 2 de mayo, una comisión humanitaria, integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Naciones Unidas, viajó a Zambudó por el inminente desplazamiento de la comunidad ante los cruentos

Mi nombre es Kimy Pernía Domicó y soy un miembro de la gente indígena emberá katio. Estoy aquí hoy como testigo y como víctima de un megaproyecto que ha tenido un impacto desastroso en mi comunidad.

Con estas palabras el dirigente indígena abrió su discurso el 16 de noviembre de 1999 ante la Comisión Permanente sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional, en Ottawa (Canadá), donde expuso en detalle el impacto negativo que para su pueblo produjo la construcción de la hidroeléctrica, así como las irregularidades cometidas por las autoridades locales y nacionales, que nunca contemplaron a los aborígenes en la construcción de la obra⁴. Tres años antes había liderado el Do Wamburá (Adiós Río) la primera gran movilización indígena contra la construcción de la hidroeléctrica, que congregó a más de mil personas y permitió iniciar un proceso de negociación con el Gobierno y la empresa Urrá, S.A.⁵

Recuerdo que la última vez que tuve la oportunidad de compartir con Kimy Pernía Domicó me habló de sus hijos, de cómo era Begidó —su comunidad natal—, de su relación con su abuelo Yari —jaibaná o guía espiritual de la bellísima región del Alto Sinú—. Caminamos bajo un inusitado sol de Viernes Santo de 2001 por una concurrida avenida de la ciudad de Bogotá. Tres

enfrentamientos entre grupos insurgentes y de Autodefensas. Simultáneamente, las FARC citaron a los delegados de los cabildos a una reunión en río Esmeralda; citación que no fue atendida y provocó un fuerte rechazo en el interior de la organización. El sábado 19 de mayo, 400 hombres de las Autodefensas, con apoyo aéreo, incursionaron a la comunidad de Kiparadó, reteniendo a 8 indígenas. Cuatro días después, miércoles 23, las FARC perpetraron una masacre que cobró la vida de 10 campesinos de la comunidad de Zambundó, provocando un desplazamiento masivo de indígenas y campesinos de las comunidades de Nejodó, Koredó y Kapupudó hacia el casco urbano de Tierralta. Un día después, las FARC volvieron a perpetrar una masacre de 24 campesinos en la vereda Palestina, ubicada en las riberas de los ríos Tigre y Manso. Un día antes de la detención de Kimy, las Autodefensas ubicaron dos retenes militares sobre el río Sinú y detuvieron varias canoas indígenas que se dirigían a una reunión extraordinaria de gobernadores indígenas que se celebraba en la comunidad de Begidó. Las Autodefensas lanzaron una amenaza de muerte a todo aquel que intentara movilizarse por el río.

4 Cabe recordar que el Estado incorporó, a través de la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y tribales, el cual obliga a consultar con las comunidades aborígenes cuando en sus territorios ancestrales puedan resultar afectados por el desarrollo de un megaproyecto.

5 La negociación tuvo como antecedente la Sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional, que reconoció en el fallo judicial tutelar los derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso del pueblo emberá katio del Alto Sinú. En tal sentido, el tribunal ordenó a la empresa Urrá, S.A., indemnizar al pueblo aborígen con un subsidio alimentario y de transporte para todos los miembros, durante veinte años. También ordenó adelantar un proceso de consulta y concertación, previo al llenado y operación del embalse, que contemplara los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales.

días después partió para la ciudad de Québec (Canadá), a fin de participar como representante de su pueblo en el Foro de Derechos Humanos de la Cumbre de los Pueblos; evento paralelo a la Cumbre de Libre Cambio para las Américas. Allí planteó la grave situación humanitaria que el pueblo emberá katio estaba viviendo por cuenta de la presión ejercida por los actores armados. También habló de las implicaciones que tendría el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para los pueblos aborígenes de la región. A mediados del mes de mayo regresó a Colombia, y a pesar de la advertencia para que temporalmente no regresara a Tierralta, él insistió en viajar, empeñándose, como siempre fue su costumbre, en estar en el ojo del huracán.

Sostienen los comunicados de los cabildos mayores que ese sábado 2 de junio de 2001 Kimy se encontraba a dos cuadras de la sede de estos cabildos, cuando fue detenido por tres hombres armados que lo forzaron a montarse a una motocicleta, mientras él gritaba con todas sus fuerzas: “Me cogieron, me llevan secuestrado”. La prensa, por su parte, también recogió la versión de testigos que afirmaron que el indígena hizo un último esfuerzo por tratar de escaparse antes de que la motocicleta de color blanco se perdiera por la carretera que de Tierralta conduce a la ciudad de Montería, capital de la provincia. Pero, según los testigos, le pusieron un arma en la cabeza y lo volvieron a dominar.

Con la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) —que busca, por un lado, propiciar procesos de paz a través de la desmovilización individual o colectiva a la vida civil de los grupos paramilitares y, por otro, garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación—, Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), rindió versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz de la ciudad de Medellín el 16 de enero de 2007, confesando más de 30 crímenes atroces perpetrados. Además de indicar que sus acciones contaron con el apoyo y colaboración de los organismos de inteligencia y de las fuerzas del Estado, el comandante también aceptó su autoría en el

secuestro, desaparición y asesinato de Kimy Pernía Domicó. De acuerdo con el testimonio judicial, la orden fue dada por el también comandante Carlos Castaño Gil. Relató que después de ser torturado y asesinado, los restos del dirigente emberá katio fueron enterrados en cercanías al municipio de Tierralta y, posteriormente, desenterrados y arrojados al río Sinú. La confesión, no obstante, no ofreció mayores indicios respecto a un aspecto que, a mi modo de ver, resulta fundamental en lo acontecido con Kimy a mediados de 2001: el tiempo transcurrido entre el momento de la desaparición y el momento de la muerte⁶.

¿Vivo o muerto?

El 15 de julio de 2001, el periódico regional *El Meridiano de Córdoba* publicó en páginas interiores una noticia con el título “Kimy está vivo”, haciendo referencia a lo dicho durante una conferencia de prensa concedida por los dirigentes indígenas del ámbito nacional en la sede de la Defensoría del Pueblo. En la rueda de prensa, el dirigente Abadio Green sostuvo que Kimy había sido secuestrado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tenía conocimiento de que se hallaba en una finca cercana al municipio de Tierralta y, finalmente, que estaba vivo. Dicha certeza, de acuerdo con el registro periodístico, estaba fundamentada en la información recopilada por los propios indígenas que habitaban la zona; la nota periodística mencionaba además que los indígenas basaban su afirmación en

6 Para la realización del presente análisis, me declaro deudor de los argumentos expuestos por Michael Pollak, Luisa Passerini y Alessandro Portelli. El primero reivindica la historia oral como método que, apoyado en la memoria, posibilita la producción de representaciones que desplazarían el trabajo de reconstituir lo real: “Si la memoria está construida socialmente, es obvio que toda la documentación también lo está. Para mí, no hay diferencia fundamental entre fuente escrita y fuente oral. La crítica de las fuentes, tal como todo historiador aprende a hacer, debe, a mi juicio, ser aplicada a todos los tipos de fuentes. Desde este punto de vista, la fuente oral es exactamente comparable a la fuente escrita. Ni siquiera la fuente escrita puede ser tomada tal y como se presenta” (Pollak, 2006, p. 42). Por su parte, Passerini (1991, p. 147) reconoce que la tarea en el campo historiográfico implica aceptar que las subjetividades propias de las fuentes orales también tienen una historia que es cambiante y cuyos sentidos son el resultado de luchas y disputas. Finalmente, Portelli (1996) señala que las fuentes orales no siempre son fiables para la reconstrucción rigurosa de un acontecimiento, lo cual no las torna inválidas o descartables, pues sirven para “ir más allá de la materialidad visible de los acontecimientos, atravesando los hechos para descubrir sus significados” (p. 6).

lo dicho por sus médicos tradicionales (jaibanás), quienes aseguraban que el dirigente aborigen estaba vivo. En ese marco, la dirigencia indígena pedía:

Estamos en disposición de poder conversar con los secuestradores y llegar a unos acuerdos humanitarios, porque no es posible una espera de tanto tiempo. Los familiares de Kimy lo exigen y las comunidades indígenas de Colombia lo exigimos, y estamos esperando cualquier noticia, para poder conversar (*El Meridiano de Córdoba*, 2001, p. 4A).

Atrás habían quedado dos situaciones complejas respecto a la desaparición de Kimy, que indican la manera como los organismos gubernamentales buscaron inscribir el acontecimiento. Por un lado, el 9 de junio de 2001 el periódico *El Tiempo* reprodujo las palabras del coronel Henry Caicedo, comandante departamental de policía, quien mediante un comunicado oficial justificó la desaparición, aduciendo que Kimy tenía vínculos con el narcotráfico. La fuerte respuesta por parte de las organizaciones sociales e indígenas tanto en el ámbito nacional como internacional obligó al funcionario a retractarse. La rectificación también se hizo a través del periódico:

Al momento de enfocar mis expresiones en torno al secuestro de Kimy Pernía Domicó no pretendí enlodar el nombre del afectado ni muchos menos fue mi intención justificar este acto delincuencia, que no posee el más mínimo de apoyo de ninguna entidad del gobierno y mucho menos de mis consideraciones. En tal virtud, es el momento de resarcir cualquier mala interpretación que bien pude darle a las investigaciones que hasta ahora se adelantan a efectos de devolver la libertad al ciudadano secuestrado (2001, p. 13A).

El segundo episodio estuvo relacionado con el Decreto 00472 del 13 de junio de 2001, expedido por la Gobernación de Córdoba, el cual prohibió el acceso a una marcha que las organizaciones indígenas realizaban en protesta por la desaparición de Kimy y que debía culminar en la ciudad de

Montería. De acuerdo con la medida, la marcha no era posible, pues en la ciudad se estaba celebrando la 41.^a Feria Nacional Ganadera; ello obligó a que la Defensoría del Pueblo interpusiera una acción judicial para hacer respetar el derecho del pueblo emberá katío a la protesta.

La interpretación dada por las organizaciones indígenas a la negativa fue consignada en los comunicados con una afirmación contundente: “A los gobiernos nacional y departamental le importaban más las vacas que la seguridad de las 84 etnias”. Los comunicados de los cabildos mayores del río Sinú y Verde también construyen desde un principio un sentido heroico en torno a la figura de Kimy, mostrándolo como un hombre que tuvo que superar la adversidad generada por las reglas del *kampunía* (hombre blanco). La figura de héroe adquiere en los comunicados su mayor dimensión cuando Kimy asume el liderazgo de las protestas contra la empresa Urrá, S.A., fijándose, además, una oposición entre los indígenas y entidades gubernamentales, que apoyadas en la fuerza pública, desconocen sus derechos y amenazan su condición como pueblo aborigen. Ahora bien, ¿por qué los dirigentes indígenas armaron una rueda de prensa para decir que Kimy aún estaba vivo?

Nueve años después de la desaparición de Kimy tuve la oportunidad de acceder a una entrevista concedida por Martha Cecilia Domicó, hija del dirigente. En la conversación se quiso precisar lo relacionado con la muerte de su padre. También interesó tratar de establecer el tiempo transcurrido entre la retención de Kimy y el momento en que circuló el rumor de su asesinato:

— ¿Sabe si Kimy está vivo?

— No, a él lo mataron a los pocos días de su retención; es más, cuando hicimos la marcha (junio de 2001) ya él estaba muerto, ya que a él lo cogieron para torturarlo, para sacarle una información. ¿Cuál? No sé, ya que él prefirió morir antes de decir algo.

— ¿Cuándo supo de la muerte de Kimy?

— A los pocos días de su retención, alguna gente del cabildo se reunió con los paramilitares, y ellos dijeron que a mi papá ya lo habían matado.

— ¿Cuántos días pasaron desde la retención y hasta que se conociera que Kimy estaba muerto?

— No me acuerdo, pero fue antes de la marcha.

— ¿Tiene conocimiento de cómo murió?

— Sí, a él lo torturaron con corriente, le sacaron los ojos y lo fueron cortando con motosierra por partes; por último, le cortaron la lengua. A mi papá lo cortaron en cuatro pedazos, incluso dicen que se le comieron algunos de sus órganos.

— ¿Cómo lo supo?

— Porque a mi papá lo cogió alias “el Paisa” y alias “Giovanni”, ambos participaron en su muerte; uno de ellos, antes de morir, me dijo todo lo que le habían hecho, y que no lo esperara más; incluso me dijo que a él no lo arrojaron al río como dijo Mancuso, sino que sigue enterrado por los lados de la finca Pailas, pero ¿allá quién sube?

— ¿Le informaron por qué lo hicieron?

— Según “el Paisa”, eso fue orden directa de Mancuso, ya que él consideraba a mi papá como colaborador de la guerrilla; además, él decía que mi papá había traído mucha plata de Canadá para esa gente.

Si me atengo al testimonio ofrecido por Martha Cecilia Domicó, el rumor sobre la muerte de Kimy se suscitó antes de que se realizara la marcha,

la cual se produjo quince días después de la retención. De igual forma, el testimonio señala que el rumor tuvo como base la reunión sostenida por miembros de los cabildos mayores con los comandantes paramilitares. Este punto es importante, porque la versión coincide con un comunicado emitido por los cabildos mayores, fechado el 2 de agosto de 2001, que reseña el agravamiento de la situación humanitaria entre los emberá katíos tras la desaparición de Kimy.

El comunicado habla de una entrevista que algunos líderes aborígenes sostuvieron con tres comandantes paramilitares en cercanías del municipio de Tierralta. Dos aspectos resultan llamativos en la forma como se cuentan los hechos: primero, la narración recoge literalmente las palabras de los paramilitares en el encuentro que estos tuvieron con los aborígenes; es decir, el sentido del encuentro se construye desde la perspectiva de unos perpetradores que justifican sus acciones a través de señalamientos que ubican a algunos aborígenes como auxiliares de la insurgencia; segundo, la narración posibilita evidenciar una disputa política en el interior de los cabildos mayores, reflejada en el tratamiento informativo que recibió la desaparición de Kimy. Es sobre este segundo punto que quiero ahondar.

Otorgándole la voz a los paramilitares, el primer párrafo del documento enuncia:

Kimy lo tuvieron vivo durante 10 días, y cuando comenzó la movilización indígena en Tierralta decidieron matarlo, cortándolo a pedacitos. La cabeza la partieron con un hacha. Al final su cuerpo cupo en un pequeño hueco cavado en la tierra.

Más adelante se hace una mayor precisión en torno a la fecha de la muerte, planteado que esta se produjo

el 13 de junio de 2001, cuando el gobernador del departamento prohibió la marcha indígena a Montería y cuando llegaron las delegaciones

de la Misión Humanitaria de Búsqueda. Dijeron que por cada denuncia [...] iban cortando un pedacito del cuerpo [...] La cabeza se la cortaron con un hacha y el cuerpo despedazado cupo en un pequeño hueco en la tierra.

De igual forma, el encuentro ratificó los motivos de la desaparición:

Sobre Kimy y Simón –otro emblemático líder katio– dijeron que con las masacres de campesinos en Zambudó (23 de mayo) y del río Manso (28 de mayo) ya habían decidido llevarse a Simón y Kimy. Primero a Simón porque le habían advertido que no subiera remesas para la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores Indígenas que se hizo en la comunidad de Begidó el 1 y 2 de junio, y la llevó. Es de anotar que aquella advertencia sí se la hicieron a Simón, pues personalmente vino Lino del cabildo y bajó esa razón. Otra anotación: recuérdese que los paras mantuvieron un retén en el río Sinú del 1 al 5 de junio, impidiendo que alguien bajara de Begidó. Entonces estaban esperando a que Simón bajara de la zona para llevárselo, pero en esas apareció Kimy (que venía del Congreso Indígena del Pacífico y de reunirse con Primeras Naciones del Canadá en Medellín) y entonces decidieron cogerlo a él.

Luego de enunciar la muerte de Kimy, la narración da un giro y tiende un manto de duda sobre lo dicho por los paramilitares, sugiriendo que “las Autodefensas no le han dicho ni a la Cruz Roja ni a la Defensoría del Pueblo que Kimy haya muerto”, lo cual implicaría oficializar la muerte. En tal sentido, el documento finaliza solicitando prudencia sobre la información consignada, lo cual resulta contradictorio en relación con lo planteado en los párrafos precedentes.

A mi modo de ver, el comunicado que enuncia la muerte de Kimy devela la fuerte fragmentación organizativa que se vive en el interior del pueblo

emberá katio; fragmentación que desborda el conflicto que se desprende de la construcción de Urrá, aceptando la versión indígena que ubica a la represa como factor de conflictividad. ¿Por qué resaltar en un comunicado la voz que justifica las acciones de quienes han sido sus principales victimarios? ¿Por qué no construir otro sentido a lo manifestado por quienes asistieron a la reunión? ¿Por qué, desde las voces de los paramilitares, el comunicado señala nombres que convierten a los mencionados en objetivo militar? ¿Por qué anunciar la muerte de Kimy si esta no contaba con una prueba material que confirmara la versión? ¿Por qué los dirigentes indígenas organizaron una rueda de prensa para deslegitimar los rumores que daban cuenta de la muerte de Kimy?

Silencios deliberados

En la desaparición de Kimy Pernía Domicó hay dos particularidades que, a mi modo de ver, caracterizan al acontecimiento: por un lado, los silencios que emergieron desde el mismo momento en que se produjo la retención, anclados a lo que representó Kimy como dirigente en el interior de la organización aborigen; por otro lado, los usos otorgados a las memorias que se construyeron en torno a la figura del indígena.

Sobre el primer aspecto, la desaparición de Kimy está matizada por unos silencios que se han venido reforzando con el paso de los años. Ahora bien, a la reticencia de hablar por parte de aquellos que estuvieron con el dirigente –tanto en el plano familiar/personal como en el marco organizativo– respecto a los motivos que pudieron propiciar su desaparición por parte del paramilitarismo, hay que agregar que esos silencios también se registran y densifican desde los sentidos que se configuran en un discurso organizativo (regional y nacional), lo que convirtió a Kimy en “héroe” y “víctima” frente a unos actores –grupos armados legales e ilegales, Estado y empresa Urrá– que amenazaban la integridad y supervivencia de los emberá katíos.

Revisando los comunicados de prensa tanto del orden regional como nacional, se evidencia la construcción de un “nosotros inclusivo”⁷ que, además de ubicar estratégicamente a los actores que amenazan a los aborígenes, busca proyectar un sentido de unidad interna, imprescindible para no sucumbir ante las presiones externas. Lo interesante es que ese sentido que envuelve un acuerdo respecto a qué recordar y qué olvidar, también suprime las contradicciones internas de los cabildos mayores emberá katíos.

En ese contexto, se recuerda a Kimy como el dirigente indígena que –siguiendo la tradición de su padre, el cacique “Manuelito”– salió del resguardo para encabezar la lucha contra un modelo de desarrollo, encarnado en la construcción de la represa Urrá, que condena a los aborígenes a la desaparición. Se proyecta, entonces, la imagen de “héroe” que con sus actos desafió a la institucionalidad representada por el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa Urrá, S.A. Kimy Pernía Domicó se convirtió en emblema de un movimiento que logró que su causa fuera estudiada y fallada a favor por el máximo tribunal de justicia en Colombia: la Corte Constitucional.

La imagen de “héroe” se compagina con la imagen de “víctima” que el discurso organizativo construyó tras su desaparición. Como en el caso de otros líderes populares desaparecidos y asesinados, Kimy es proyectado como víctima de las presiones de los distintos actores armados; también como víctima de un modelo económico que al ubicar los recursos naturales como fuente de capital⁸, destruye los entornos de las comunidades campesinas y

7 Hago referencia a la categoría empleada por Benveniste en la teoría de la enunciación.

8 Aunque no forme parte de las representaciones y sentidos que se desprenden de los discursos organizativos, sobre el particular cabe resaltar el análisis de Polanyi (2002) en torno a la tierra y a los recursos naturales como “mercancías ficticias”. El autor indica que la tierra no solo forma parte de la naturaleza, sino que además está ligada a las instituciones humanas: “La tierra y la mano de obra no están separadas; el trabajo forma parte de la vida, la tierra sigue siendo parte de la naturaleza, la vida y la naturaleza forman un todo articulado. La tierra se liga así a las organizaciones del parentesco, la vecindad, el oficio y el credo; con la tribu y el templo, la aldea, el gremio y la iglesia” (p. 265). Este principio, no obstante, se rompe cuando en la economía liberal se separa al hombre, a la tierra y a la organización social, configurando la utopía del mercado autorregulado.

tribales; y, finalmente, la figura de Kimy, imbricada en el sentido de unidad comunal, se proyecta como víctima del abandono sistemático del Estado.

Reitero que los sentidos de “héroe” y “víctima” en torno a la figura de Kimy no solo enfatizan una unidad interna que se extiende desde la organización regional hasta las organizaciones nacionales indígenas, sino que también eliminan cualquier resquicio de contradicción en el interior de los cabildos mayores emberá katio. Estos sentidos se van a complementar con otra narrativa también presente en los comunicados y discursos organizativos, que se comenzó a gestar desde el momento en que la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez decidió extraditar a los comandantes paramilitares a los Estados Unidos: la “verdad” también fue extraditada. Asumir esta posición posibilitaría cerrar el acontecimiento, puesto que aquel que podía ofrecer pistas sobre el porqué de la desaparición de Kimy, el comandante Salvatore Mancuso, ya no está y se niega a colaborar con la justicia colombiana. Su testimonio se limitó a ratificar que Kimy estaba muerto y que su cuerpo fue arrojado a las aguas del río Sinú.

No obstante, y explorando otra ruta de análisis, también es factible pensar que la extradición del comandante Mancuso puede propiciar escenarios para que afloren recuerdos y narraciones que en el pasado fueron reprimidos o silenciados ante el temor personificado por el jefe paramilitar. No obstante, el comandante ya no está y los silencios siguen presentes. ¿Cuáles son los motivos para que el silencio siga caracterizando el acontecimiento?

A mi modo de ver, los silencios están signados por las implicaciones políticas que tendría el narrar quiénes, desde los propios cabildos mayores, pudieron beneficiarse indirectamente con la desaparición de Kimy⁹. Ello

9 Todorov (2008) señala que no todos los recuerdos del pasado son admirables, lo que implica preguntarse tanto por los sentidos que se le otorgan al recuerdo como por los usos que en el espacio público se le otorgan a esos sentidos. En ese contexto, distingue entre una *lectura literal* y una *lectura ejemplar* del acontecimiento recuperado. En la primera, el acontecimiento recordado se produce en asociaciones de directa contigüidad que no conducen a ningún punto que no sea el mismo acontecimiento, “extendiendo las consecuencias del trauma inicial a todos los instantes de la existencia” (Todorov, 2008, p. 50). En ese caso, la memoria será un ejercicio de literalidad que permanece intransitiva. Por el contrario, cuando el acontecimiento recordado se utiliza en una clave que trasciende el

queda claramente reflejado en la entrevista concedida por Martha Domicó. Su temor ya no es frente a los perpetradores, quienes, además, fueron los que revelaron la suerte corrida por su padre tras la desaparición.

Parafraseando a Pollak (2006), es preferible guardar silencio para no caer en “malentendidos” que puedan comprometer, en el presente o en el futuro, a personas y procesos que involucrarían a una de las organizaciones más representativas del movimiento indígena colombiano. De ahí la importancia respecto a lo que Pollak (2006, p. 24) denomina la “función de lo no-dicho”, es decir, la manera como los recuerdos prohibidos pasan por estructuras de comunicación informal. En la actualidad, el acontecimiento se puede abordar desde el/los rumor/es que no se deja/n registrar. Esta condición de no registro es literalmente una garantía de vida para cualquier testimonante.

Respecto a la segunda característica que domina el acontecimiento —los usos que se otorgan a la memoria de Kimy Pernía Domicó— habría que agregar dos sentidos más que se distancian del significado “héroe-víctima” otorgado por las organizaciones indígenas y que ponen de manifiesto las disputas políticas por la memoria. El primero de ellos se desprende del testimonio judicial ofrecido por el comandante Salvatore Mancuso en el marco de la Ley de Justicia y Paz, quien reconoce la autoría en la desaparición y muerte de Kimy por orden del extinto comandante Carlos Castaño Gil, pero también catalogó a Kimy Pernía Domicó como auxiliador y colaborador de la insurgencia de las FARC. Este sentido resulta problemático, pues la Ley de Justicia y Paz, enmarcada en los principios de verdad, justicia y

qué ocurrió, el cómo ocurrió y a quiénes involucró, se exploran situaciones nuevas que envuelven a otros agentes y a otras perspectivas. Explica Todorov (2008): “La operación es doble: por un parte, como un trabajo de psicoanálisis o un duelo, neutralizo el dolor causado por el recuerdo, controlándolo y marginándolo; pero, por otra parte —y es entonces cuando nuestra conducta deja de ser privada y entra en la esfera pública—, abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un *exemplum* y extraigo una lección. El pasado se convierte por tanto en principio de acción del presente. En este caso, las asociaciones que acuden a mi mente dependen de la semejanza y no de la contigüidad, y más que asegurar mi propia identidad, intento buscar explicaciones a mis analogías” (pp. 51-52). El uso literal de la memoria encapsula el acontecimiento pasado en el presente, pero el uso ejemplar permite que ese pasado se proyecte en un presente que debe garantizar, ante todo, justicia.

reparación, está pensada para que desde el escenario judicial los perpetradores confiesen los delitos cometidos. Las versiones ante los fiscales de justicia y paz se constituyen en especie de “rituales jurídicos” en los que la confesión supone arrepentimiento (Theidon, 2006, p. 179). Cuando el testimonio judicial reconoce los delitos de desaparición y asesinato, pero cataloga a Kimy como auxiliador de un grupo insurgente, es claro que se busca contar con una justificación que legitima el acto, en la medida en que el desaparecido/asesinado deja de ser “víctima” para constituirse en “objetivo militar”. Bajo la condición de “objetivo militar”, su desaparición y muerte es explicable en el marco de un conflicto armado.

El segundo sentido se desprende de los comunicados oficiales emitidos por las instituciones gubernamentales, especialmente por el Ministerio de Medio Ambiente, donde Kimy, como representante y proyección del pueblo aborígen emberá katío, se constituye en obstáculo para el desarrollo económico del país. Este discurso parte de dos premisas: por un lado, que los megaproyectos son trascendentales para el desarrollo regional y nacional; por otro, que en la realización de estos megaproyectos debe primar el interés general, supuestamente representado por todos los colombianos, sobre el interés particular, representado por el pueblo aborígen. En ese orden de ideas, el discurso institucional señala que el desarrollo de un país no puede estancarse por el “respeto” a unos territorios ancestrales, sobre todo cuando el pueblo aborígen goza de una indemnización económica que garantizaría resarcimiento de los impactos provocados por la construcción de la represa.

Finalmente, si pensamos en la desaparición de Kimy Pernía Domicó como un acontecimiento que no está cerrado, es factible pensar en una memoria activa imbricada con intencionalidades sociales, políticas y culturales de un pueblo que re-significa la experiencia pasada para otorgar unos sentidos que reivindiquen las demandas del presente. No obstante, aún falta ahondar sobre esas fracturas internas que se desprenden de un acontecimiento que, por ahora, se percibe desde el silencio.

Referencias

- Castillejo, A. (2009). *Los archivos del dolor. Ensayos sobre la violencia y el recuerdo en la Sudáfrica contemporánea*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Del Pino, P. (2003). Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los Andes. En Del Pino, P. y Jelin, E. (comps.). *Luchas locales, comunidades e identidades*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- El Meridiano de Córdoba (2001). “Kimy está vivo”.
- El Tiempo (2001). Oficial reconoce no tener pruebas para señalamiento. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-441651>
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- Passerini, L. (1991). Ideología del trabajo y actitudes de la clase trabajadora hacia el fascismo. En Schwarzstein, D. (Ed.). *La historia oral*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Polanyi, K. (2002). *La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Pollak, M. (2006). *Memoria, olvido, silencio. La producción social de identidades frente a situaciones límite*. La Plata: Al Margen.
- Portelli, A. (1994). El tiempo de mi vida: las funciones del tiempo en la historia oral. En Aceves, J. (Ed.). *Historia oral*. México: Instituto Mora.
- Portelli, A. (1998). O massacre de Civitella Val di Chiana (Toscana, 29 de junho de 1944): mito e política, luto e senso comum. Em Moraes Ferreira, M. y Amado, J. (Eds.). *Usos y abusos da história oral*. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.

Theidon, K. (2006). Los encapuchados: enfrentando el pasado del Perú.
En Kaufman, S. y Jelin, E. (comps.). *Subjetividad y figuras de la memoria*.
Buenos Aires: Siglo XXI.

Todorov, T. (2000). *Los abusos de la memoria*. Barcelona: Paidós.